

Notifíquese. El C. Primer suplente del Juzgado de Distrito de este Estado, en ejercicio por falta de propietario, así lo resolvió, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé.—*Lic. Cristóbal Chapa.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, 15 de Enero de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 4 de Febrero de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por D. Teodoro Roel, contra la Orden dictada por el C. Juez 3º de letras de Monterey, mandando reducirlo á prision, por haberse informado del lugar donde se encontraba preso Antonio Herrera, que habia sido detenido como uno de los autores de una asonada que tuvo lugar en la 5ª Seccion electoral de Monterey, con cuya providencia se ha violado en sentir del quejoso, la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitucion federal, por ser falso ó insuficiente el motivo que expresa la Orden de aprehension como causa legal del procedimiento.

Considerando: que la Orden contra la cual se solicitó el amparo federal, contiene el motivo que hubo para decretar la detencion de D. Teodoro Roel, conforme á lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta fundamental.

Que es atribucion exclusiva del Juez de la causa, valorizar las presunciones de culpabilidad que puedan motivar la detencion provisional, y que si el motivo expresado en dicha Orden es falso ó contrario á las leyes particulares del Estado, tiene el agravado expeditos los recursos judiciales ordinarios.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta. Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 13 de Enero del presente año, que declaró haber

lugar al amparo federal en el presente caso. Segundo: la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Teodoro Roel, contra los efectos de la Orden de 14 de Diciembre del año pasado, que para su aprehension dictó el Juez 3º de letras de Monterey.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan José de la Garza.*—*José María Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*José María del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 11 de Marzo de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Monterey por el C. Lic. Lázaro Garza Ayala, como apoderado de los CC. José M. Flores y otros, contra los efectos del decreto número 21 de la Legislatura del Estado de Nuevo Leon, por considerar violadas en sus personas las garantías que concede la Constitucion general de la República en sus artículos 14 y 16.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El C. Gobernador al comenzar su informe á fojas 30 y siguientes, asienta que el Juzgado de su cargo se ocupa de resolver

una cuestion de la mas alta importancia para el Estado de Nuevo Leon, supuesto que se trata nada menos que de fijar de una manera clara y precisa si el Poder Legislativo del Estado puede ó nó legislar en cuanto á su régimen interior, y si sus disposiciones deben ser ó no debidamente acatadas por los Nuevo-leonenses, cuando en nada absolutamente se opongan á las prescripciones de la Constitucion General. Yo, C. Juez, tambien juzgo la cuestion que se debate de la mayor importancia, no ya para el Estado de Nuevo Leon, sino para todo el país, pues la cuestion que se trata es, no de precisar si un Estado tiene la facultad de darse leyes para su régimen interior, facultad que nadie ha puesto en duda, sino de echar, por decirlo así, los cimientos de nuestras instituciones democráticas, resolviendo sobre si el pueblo puede ser intervenido por un poder limitado y extraño como lo es el Legislativo, al ejercer la primera prerogativa emanada de su Soberanía, el derecho de elegir sus mandatarios.

Sin los tamaños necesarios para ocuparme de esta cuestion, pero obligado á hacerlo por ministerio de la ley, me cabe la esperanza de que siguiendo este juicio sus trámites, ella sea tratada con la maestria que se merece.

El dia 28 del próximo pasado Diciembre ocurrió ante V. el C. Lic. Lázaro G. Ayala con poder y en representacion de una mayoría de los CC. escrutadores de esta municipalidad, pidiendo proteccion y amparo contra los efectos del artículo 4º de la ley que expidiera el H. Congreso del Estado el 23 del mismo Diciembre, y contra la orden que para reducir á prision á sus poderdantes dictara el C. Gobernador; y solicitando ademas por medio de un «Otro sí» que por la urgencia del caso se decretara desde luego la suspension previa de dicha orden; el Juzgado de su digno cargo pidió al C. Gobernador que informara dentro de veinticuatro horas, y aunque durante este lapso de tiempo, fueron reducidos á prision varios

Escurtadores y el C. Lic. Garza Ayala ocurrió con nuevo escrito solicitando segunda vez la suspension previa, esta no fué decretada sino despues de recibido el informe del C. Gobernador y oído el dictamen fiscal, y tomando en cuenta que de la no suspension podian seguirse males de trascendencia, irreparables. Resuelto el punto sobre la suspension previa, se corrió nuevo traslado por tres dias al Ejecutivo para que informara con justificacion como lo previene la ley, y rendido este nuevo informe, los autos han pasado al que suscribe para que en ejercicio de su ministerio exprese su dictamen. Pasa á dar cumplimiento á este precepto.

El actor en su ocurso de fojas 3, 4 y 5 se queja de que el artículo 4º de la citada ley de 23 de Diciembre, y la orden de aprehension dictada por el C. Gobernador del Estado, violan en las personas de cada uno de sus representados, las garantías que á todo hombre otorga nuestra Carta fundamental en sus artículos 14 y 16; ó en otros términos: se queja de que se trata de reducir á prision y juzgar á sus poderdantes por una ley retroactiva, dada con posterioridad al hecho, que hace una nueva calificacion de delito, y por un Tribunal no establecido previamente por las leyes; y por que la orden en virtud de la que se les trata de reducir á prision, es un mandamiento de autoridad incompetente, puesto que ninguna en el Estado tiene competencia segun el artículo 44 de su Constitucion, para ingerirse en los actos de las asambleas electorales, y por consiguiente en los de los escrutadores cuando funcionan como tales.

El C. Gobernador por su parte en sus informes que dan principio el uno á fojas 9 y el otro á fojas 30 de este expediente, negando que la junta de escrutadores sea una asamblea electoral propiamente dicha, assevera que la ley de 23 de Diciembre ni tiene efecto retroactivo, ni ha sido expedida con posterioridad al hecho, ni hace nueva calificacion de delito; y que no precede contra los escrutadores, en virtud de mandamiento

de autoridad incompetente, puesto que la Legislatura que sin duda alguna tiene competencia al dictar leyes para el régimen interior del Estado, la debe tener igualmente para mandar reducir á prision y encausar á los CC. que se nieguen á prestar el debido acatamiento á aquellas leyes.

Así pues y á fin de dar á la controversia toda la claridad que me sea posible, examinemos á la luz de la sana razón los siguientes puntos; primero: la ley expedida por el Soberano Congreso del Estado con fecha 23 de Diciembre próximo pasado ó el artículo 4º de ella, causa efecto retroactivo? segundo: es una ley dada con posterioridad al hecho que ella misma manda juzgar? tercero: hace una nueva calificación de aquel hecho? cuarto: la junta de escrutadores es Asamblea electoral? quinto y último: son competentes el H. Congreso y el Gobernador del Estado, para proceder contra los Escrutadores por los actos que como tales han ejercido estos?

Para examinar la primera cuestion, copiémos el artículo 4º de la repetida ley de 23 de Diciembre, que dice á la letra: «El ejecutivo hará cumplir este Decreto haciendo uso de sus facultades; mas, si los escrutadores se negaren absolutamente á cumplir con el artículo 20 de esta ley, es evidente que quieren dar por bueno el cómputo falso que hicieron, y en este caso se consignarán al Juez competente para que los juzgue como falsificadores del voto público.» Como se vé, la ley previene que si los escrutadores no se reúnen nuevamente y hacen el cómputo de votos en otra persona, se les consigne al Juez competente para que los juzgue como falsificadores del voto público. ¿Como y cuando cometieron esta falsificación? ¿La cometieron negándose á computar los votos bajo la forma que se les prevenía, ó lo habian cometido excluyendo algunos expedientes y votos? A nuestro juicio no es posible cometer una falsificación omitiendo un acto, sino ejerciendo otro, esto es, no puede falsificarse el voto público con un acto negativo; luego

el acto que manda juzgar la referida ley, había sido cometido antes de la expedición de ella; luego causa efecto retroactivo; luego es una ley anticonstitucional como expedida con posterioridad al hecho. Ninguna disposición ni general ni del Estado, había dicho que la exclusion de expedientes ó de votos aislados, hecha por una asamblea electoral, fuera delito de falsificación de voto público, las leyes llaman falsarios á los que de alguna manera alteran la justa regulacion de los votos; pero jamas se habia extendido esta calificación contra las asambleas electorales ó sus miembros; ejemplos tenemos de que el H. Congreso del Estado constituido en asamblea electoral, haya desechado los votos no de una seccion sino de pueblos enteros, sin que nadie le haya objetado incompetencia para verificarlo; de donde se deduce que la calificación de falsificadores que la ley hace, es del todo nueva, y que al hacerlo el H. Congreso ha extralimitado sus facultades, supuesto que no corresponde al Poder Legislativo sino al Judicial, la calificación de los delitos y aplicación de sus penas.

El esclarecimiento del cuarto de los puntos propuestos, que se versan sobre si la junta de escrutadores es ó no Asamblea Electoral, es de la mayor importancia, por que resuelto, se resuelve tambien el último. El Diccionario de la Academia llama asamblea á toda reunion de individuos, de aquí se sigue que la reunion de escrutadores sea Asamblea; y como esta Asamblea elige en casos análogos á aquellos en que lo hacen el Poder Legislativo constituido á su vez en asamblea electoral, y aun tiene por la ley mayor suma de atribuciones que este, resulta que tambien es Electoral. Siendo iconcuso que las leyes se interpretan las unas por las otras y las posteriores por las anteriores, veamos lo que sobre el particular dice la Constitucion política del Estado sancionada en el año de 1850, para por ella esplicar el sentido de algunos artículos de la de 1857 que hoy nos rige: la citada Constitucion de

1850 en su artículo 31, dice testualmente: "Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, en todos sus grados son independientes de todo otro poder político."

Fíjese la atención en estas palabras, *en todos sus grados*, la ley ha considerado grados en las asambleas electorales, y la reunión ó junta de escrutadores no viene á ser otra cosa que una asamblea popular electoral en su segundo grado; y si bien es cierto que en la Constitución vigente se omitieron aquellas palabras, es de presumir que esto se hiciera juzgándolas inútiles por obviar.

En el artículo 32, la misma Constitución de 1850 agrega lo siguiente: «Cada asamblea resuelve las dudas que se ofrescan sobre las cualidades de sus propios miembros y sobre la validez de las elecciones de la que le precedió.» Verdad es que las últimas palabras que dejo subrayadas, no constan en la Constitución de 1857; pero tan cierto es que en la conciencia de todos está el que la junta de escrutadores ó asamblea electoral en segundo grado, tiene esta facultad, que el mismo O. Gobernador que como suele decirse, defiende á capa y espada en su informes la ley que se debate, y la facultad que para expedirla tuviera la H. Legislatura, no ha negado á los escrutadores la dicha facultad, de que hicieron uso para desechar algunos de sus miembros. Probado como parece estar ya que las juntas de escrutadores son asambleas electorales, hagamos aplicación del artículo 44 de la Constitución vigente del Estado que dice: «Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, son independientes de todo otro poder político, y ninguna autoridad puede darles órdenes, impedir sus funciones ni revisar sus actos.» Ni podía ser de otro modo, por que en virtud de un gran principio que aunque adivino no puedo explicar, un poder está tanto más limitado por la ley, cuantas mayores son las facilidades que tiene para cometer abusos; al Poder electoral el más débil de hecho, han querido las leyes darle mayor suma de facultades, haciéndolo

absoluto ó irresponsable desde sus primeros pasos; y el querer que los escrutadores en junta, que no son más que delegados de aquella asamblea sean menos absolutos ó independientes, sería tan absurdo como pretender que fueran irresponsables cada uno de los miembros de un tribunal y no el tribunal pleno. Todos los poderes colegiados son hasta cierto punto irresponsables, esto lo quiere la ley, porque no supone, no quiere, no puede ni debe suponer, que un cuerpo colegiado cometa voluntarias y punibles aberraciones; el solo hecho de suponerlo y prevenirlo, sería inmoral.

Se ha dicho en algunos de los informes del O. Gobernador, que en nuestro sistema democrático no es concebible un cuerpo ó poder irresponsables y ¿que otra cosa son los Congresos? ¿que otra cosa es la Suprema Corte, y en general los cuerpos colegiados?

La existencia de poderes ó corporaciones irresponsables, acaso será un hueco de la ley; en hora buena, que se llene ese hueco con las formalidades que la misma ley prescribe. Se dice también, que el poder legislativo al imponer su voluntad á la junta de escrutadores, hace uso del incontrovertible derecho que tiene para interpretar la Constitución y las leyes de ella emanadas; pero acaso no ha fijado aquella las formalidades que han de preceder á toda interpretación ó reforma. ¿Y si las ha fijado de una manera precisa en su capítulo 11º, por que se desprecian? Ejemplos tenemos en el Estado de que el poder Legislativo haya apoyado las decisiones de la mayoría de escrutadores, declarando que esta tiene la facultad que hoy le niega, para desechar los votos que juzgue ilegales; mas ahora que el parecer de esa misma mayoría no cuadra á sus deseos, apoya á la minoría apelando á interpretaciones anti-constitucionales de la Carta fundamental y leyes del Estado, para hacer una declaración contradictoria de la que antes había hecho. Supuesta esta verdad, valdrá algo para derogar el artículo 44 de la Constitución del Estado, la prác-

tica inconsecuente que se alega? Creemos que no, creemos mas, que aun cuando esa práctica, que se trata de probar con el certificado que obra á fojas 8 de este expediente, datara no de quince años sino de tiempo inmemorable, no bastaría para alterar una sola letra de la Constitución.

El autor del primer informe del Ejecutivo, poniendo en relieve los males que pueden seguirse de que la eleccion de funcionarios municipales esté á merced de unos cuantos escrutadores, se finge el caso de que estos quieran á su capricho imponer á un pueblo municipales que no hayan jugado en la eleccion; el supuesto es posible, pero nosotros queremos fingir otro no menos verosímil: supongamos que de acuerdo el Ejecutivo con la legislatura de un Estado, se propone dar á su Capital un Ayuntamiento que cuadra á sus miras y deseos; supongamos que para lograr su objeto dejan de repartir boletos á multitud de CC. á quienes juzgan desafectos ó indiferentes; supongamos que á unas secciones mandan la fuerza armada, á otras á sus empleados para que formen las mesas; y supongamos por último, que agotan todos los medios que les ingiere su inventiva y el poder pone en sus manos para lograr su objeto, y que sin embargo la mayoría de los escrutadores es ganada por el partido del pueblo. ¿No podrá esta mayoría constituida en asamblea electoral, desechar los votos que á su juicio vienen como resultando de aquellos manejos?

¿No será en ellos un deber obsequiar así los derechos y deseos del pueblo, que han sido burlados? ¿O será siempre la Legislatura la que dé Ayuntamiento á los pueblos interpretando la ley á su arbitrio?

Dícese tambien en los informes del Sr. Gobernador, que el H. Congreso al expedir la ley de 23 de Diciembre, legisla en su régimen interior, y se apunta además que dicha ley manda proceder contra los escrutadores en su calidad de tales, y que por tanto no se violan en ellos las garantías individuales; sobre estos particulares direc-

mos que nuestra legislación no admite disposiciones despóticas que violan las garantías individuales, ni aun en el régimen doméstico, y que estas garantías estan tan intimamente ligadas con las del ciudadano y las del funcionario público, que no es posible atentar contra estas sin violar aquellas; en el presente caso, por ejemplo, no es posible reducir á prisión á los escrutadores, sin reducir tambien á los individuos que han funcionado como tales.

Por todo lo expuesto, el Promotor sustituto es de parecer se decrete.

Primero: la Justicia de la Union ampara y protege contra los efectos del artículo 4º de la ley expedida por el H. Congreso del Estado, con fecha 23 del próximo pasado Diciembre, á los CC. José M. Flores, Catarino Valadéz, Lino García, Bárbaro Almaráz, Jesus M. Almaráz, Rafael Peña, Ramon Jimenez, Pedro Verástegui, Severo Morales, Jesus Paz, Ruperto Rocha, Faustino Roel, Secundino Roel, Prisciliano Zambrano y Antonio Quibrera.

Segundo: la misma Justicia de la Union ampara á los referidos CC. contra la orden de aprehension que el C. Gobernador del Estado dictó en su contra, en virtud de la ley referida de 23 de Diciembre.

Monterey, Enero 12 de 1874.—*M. Treviño*.—Una rúbrica.

Es copia del original que obra en el expediente respectivo. Monterey, Febrero 7 de 1874.—*M. Treviño*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, Febrero 2 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el apoderado de los CC. José M. Flores, Catarino Valadéz, Lino García, Bárbaro Almaraz, Jesus M. Almaraz, Rafael Peña, Ramon Jimenez, Pedro Verástegui, Severo Morales, Jesus Paz, Perfecto Rocha, Faustino Roel, Lic. Secundino Roel, Prisciliano Zambrano, y Antonio Quibrera, quien considera viola-

das en las personas de sus representados las garantías que les aseguran los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, por el artículo 4º del decreto número 27 expedido por la Legislatura del Estado en 23 de Diciembre último, y la Orden del Gobierno del Estado de 27 del propio mes; vistos los informes del C. Gobernador; las pruebas rendidas por el C. Lic. Lázaro Garza Ayala apoderado de los quejosos; el alegato que este mismo presentó con la debida oportunidad; y el dictamen del C. Jefe Superior de Hacienda que lleva la voz fiscal por el ministerio de la ley, y pide que se decrete el amparo. Y resultando:

Primero: Que reunida la junta de escrutadores, de que formaban la mayoría los quejosos, conforme á la ley orgánica electoral del Estado, el día 21 del citado Diciembre, se decidió por dicha mayoría que debían desecharse ó eliminarse los expedientes de tres mesas de las que se formaron para las elecciones de funcionarios municipales del presente año de 1874, y que no debían computarse algunos otros votos, porque creyeron encontrar sustanciales vicios, tanto en la formación ó nombramiento de las mesas, como en la elección de algunos de sus miembros.

Segundo: Que la Legislatura, después de haber dado algunas órdenes á la junta, durante el ejercicio de sus funciones, encaminadas á que se computaran los votos de los expedientes eliminados, y viendo que al fin no se habían computado y que aun se habían expedido las credenciales á los ciudadanos que la misma mayoría declaró funcionarios municipales, expidió el decreto del día 23 del mismo Diciembre, declarando nulo cuanto había hecho la junta, incluidas las credenciales, y mandando que se volviera á reunir la propia junta el día que designara el Ejecutivo, para que hiciera nuevo cómputo "incluyendo los expedientes que eliminó;" que mientras no se cumpliera con esto, funcionara el Ayuntamiento de 1873; y por último, que el Ejecutivo hiciera cumplir lo mandado en el decreto sobre que se

TOMO V.—PARTE II.

reunieran los escrutadores, ordenándose en ese último artículo que es el 4º reclamado; que, "si los escrutadores se negasen absolutamente á cumplir con el artículo 2º, es evidente que quieren dar por bueno el cómputo falso que hicieron, y en este caso se consignarán al Juez competente, para que los juzgue como falsificadores del voto público.

Tercero: Que los escrutadores no obsequiaron ni las exortativas y órdenes indicadas, ni el decreto mismo en el artículo 2º, que les manda hacer nuevo cómputo y considerar los expedientes que ellos habían declarado de origen vicioso, porque consideraron y así lo dijeron, (fojas 1ª vuelta), que no reconocían en la H. Legislatura facultades para intervenir en las funciones electorales que ellos desempeñaban, y que lejos de eso, el artículo 44 de la Constitución del Estado, disponía que las asambleas electorales eran independientes de todo otro poder político, y que ninguna autoridad puede darles órdenes ni impedir sus funciones, ni revisar sus actos.

Cuarto: Que habiéndose reunido sin embargo el día que designó el Ejecutivo, para lo cual se dictó la orden reclamada, comisionándolos con la multa de doscientos pesos á cada uno, "si se negaban á cumplir con los deberes que les imponía la ley" sin perjuicio de que fueran "consignados á uno de los jueces de letras de esta Capital, (fojas 23 del cuaderno de pruebas), insistieron en sostener como buenos y legítimos sus actos electorales de los días 21 y 22.

Quinto: que en tal virtud ocurrieron á este Juzgado los mencionados individuos, pidiendo amparo contra el artículo 4º del decreto que califica de delito de falsificación del voto público sus actos electorales; por lo que lo juzgan retroactivo y contrario al artículo 14 del pacto federal; y los manda consignar á un juez para que los castigue como falsificadores, con lo que juzgan violado el artículo 16 del mismo pacto, ya porque conforme á la Constitución del Estado "ninguna autoridad" puede revisar sus

actos, y menos por lo mismo juzgarlos por ellos; y ya tambien, porque no hay motivo legal para el procedimiento, vistas las prevenciones constitucionales y legales preexistentes. Y pidieron tambien amparo contra la misma Orden del Ejecutivo, que agregaba por su parte la pena pecuniaria referida, si no cumplieran con el mandato de la ley: solicitud de amparo que se funda, en que no es competente el Gobierno para proceder contra las asambleas electorales por sus actos, y porque es ilegal la causa del procedimiento conforme al citado artículo 44 de la Constitucion del Estado (fojas 5 frente).

Sesto: Que mientras se ventilaba el punto previo de suspension provisional de los efectos del artículo 42 reclamado y la Orden referida, se redujo á prision á seis de los quejosos, porque el apoderado de ellos instó por la misma suspension inmediata y Considerando:

Primero: que este Juzgado debe detenerse y apartarse de toda discusion que no tienda al exámen y dilucidacion de si se violan ó no se violan las garantías que aseguran al hombre los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal de 1857.

Segundo: que para juzgar de la violacion ó no violacion del artículo 16 de la Constitucion federal que se invoca, es necesario tener presentes los que se citan de la particular del Estado, ya que el 41 de la misma federal dice: "el Pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Union en los casos de su competencia y por los de los Estados para lo que toca á su régimen interior, en los terminos respectivamente establecidos por esta Constitucion federal y las particulares de los Estados."

Tercero: que hablando la Constitucion de éste Estado de la division de sus poderes, dice en el artículo 38: "El poder Supremo del Estado se divide para su ejercicio, en *electoral*, legislativo, ejecutivo y judicial;" y en el 39: "Estos poderes derivan del pueblo, y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en la

Constitucion, sin que se entienda permitidas otras por falta de expresas restricciones;" "y tratando del poder electoral, dice: artículo 44: "Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, son independientes de todo otro poder político, y ninguna autoridad puede darles Órdenes, impedir sus funciones, ni revisar sus actos."

Cuarto: que conforme al sistema de eleccion directa adoptado por la ley orgánica sobre elecciones, y emitidos ya los votos en las asambleas populares, se reunieron todos los escrutadores de las mesas de esta municipalidad para hacer el escrutinio, y la declaracion de los funcionarios municipales; facultades exclusivas de esas juntas, como se vé en la referida ley que acompañó el C. Gobernador á su informe. (Capítulo IV.)

Quinto: que al eliminar tres expedientes y desechar algunos votos la mayoría de la asamblea de escrutadores, considera que ejerce sus facultades propias, como las ejerce la Legislatura en su caso, cuando ejerce las funciones de colegio electoral, y califica y computa los votos emitidos en las asambleas populares que le incumbe calificar y computar para declarar electos á los funcionarios, cuya declaracion le encomiendan la ley fundamental del propio Estado y la orgánica citada.

Sesto: que como tal asamblea electoral, no tiene duda que ejerce funciones del poder electoral, y que conforme al artículo 44 antes copiado, es independiente de todo otro poder, y ninguna autoridad pudo darle Órdenes, ni revisar sus actos. De donde se deduce y patentiza, que nadie puede enjuiciar á las mayorías de las asambleas por sus actos, que en el sistema de las mayorías, fundamental de las democracias, se tienen por la verdad misma, como sucede con las mayorías de los jurados, y de las mismas asambleas legislativas, cualquiera que sea la funcion que ejerzan.

Sétimo: que aunque el C. Gobernador ha querido negarle el nombre de asamblea, no se puede desconocer que lo es, ya se

atienda á la simple significacion de la palabra, ya á la misma Constitucion del Estado, que en el artículo que llama á las asambleas primeras en que se emite el voto "generales" para distinguirlas de las asambleas de escrutadores, cuya distincion se hace perceptible en el artículo 47 de dicha Constitucion particular. Además de que no puede sostenerse, sin cohar por tierra la necesaria independencia del poder electoral, que solo á las asambleas generales no se puede dar órdenes, ni revisarles sus actos, y que esto sí es permitido respecto de las juntas que van á hacer la calificacion y el cómputo, y la declaracion de los electos. Todas las juntas ó asambleas, primeras y segundas, constituyen el poder electoral, conforme á la Constitucion; y el poder electoral es independiente.

Octavo: que por lo dicho se palpa, que supuesto que *ninguna autoridad* puede revisar los actos de las asambleas electorales, conforme á la Constitucion del Estado, no hay juez competente para juzgar á los individuos que compusieron la mayoría de la que se trata, por los actos que ejercieron. Y se palpa tambien, que no hay autoridad competente ni para mandar molestar y aprehender á esos individuos, tampoco hay por las mismas razones, causa legal del procedimiento contra ellos.

Noveno: que respecto de la violacion del artículo 14 del Pacto federal, es decir, respecto de si tiene efecto retroactivo el artículo 49 reclamado, por el hecho de calificar de falsificacion del voto público el acto de la mayoría de la junta de escrutadores, por el cual se decidieron que no debian computarse los votos de los expedientes eliminados, es un punto que con lo dicho queda resuelto; porque conforme á la Constitucion y ley orgánica referidas, no se ha establecido que se tenga como delito ese acto, por el cual se desechan votos que se califican nulos, y expedientes que provengan de mesas cuyo nombramiento se califique tambien, por las mismas juntas, de ilegal ó ilegítimo,

y por el cual tambien se califiquen las cualidades de los mismos miembros de las juntas. Y no solo no calificar de delito ese caso, sino que prohíbe la Constitucion que se revisen los actos de las asambleas, y que se les den órdenes por autoridad alguna.

Décimo: que aunque el C. Gobernador pretende que este delito está ya definido ya de antemano, por el artículo 20 de la ley electoral, basta verse ese artículo para comprender que se refiere á cualquiera ó cualesquiera ciudadanos que hayan votado con boletas falsas ó que hayan alterado la regulacion justa de los votos, á quienes se debe juzgar por ese delito por un juez de letras. Pero no se puede considerar comprendido en ese artículo el caso de que una asamblea compuesta de veintiseis miembros, discute y vota si se deben admitir tales ó cuales votos, y decide que nó por una mayoría de diez y seis contra diez. Por lo que dicho artículo 49 del decreto de 23 de Diciembre último, al calificar ese acto anterior de delito, y mandar al mismo tiempo que se castigue á los individuos que formaron la expresada mayoría, incurrió en el defecto ó vicio de retroactividad, con perjuicio de los mencionados individuos.

Undécimo: que por las mismas razones de incompetencia en el C. Gobernador, y de falta de legalidad para el procedimiento contra los individuos que formaron la mayoría de la junta de escrutadores, cuyos actos ninguna autoridad puede revisar ni castigar, debe tenerse su orden reclamada, de fojas 23 del cuaderno de pruebas, como contraria á las garantías que asegura el artículo 16 de la Constitucion federal.

Por todas estas consideraciones, y de conformidad con lo que ha pedido la voz fiscal y de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal de la República y ley de 20 de Enero de 1869 que los reglamenta, se resuelve:

1º La Justicia de la Union ampara y protege á los CC. José M^º Flores, Catarino Valadéz, Lino García, Bárbaro Almaráz,

Jesus M^a Almaráz, Rafael Peña, Ramon Jimenez, Pedro Verástegui, Severo Morales, Jesus Paz, Perfecto Rocha, Faustino Roel, Lic. Secundino Roel, Prisciliano Zambrano y Antonio Quibrera, contra los efectos del artículo 4º del decreto de la Legislatura de este Estado de Nuevo Leon, de 23 de Diciembre último.

2º La Justicia federal ampara y protege igualmente á los mismos ciudadanos, contra la órden del C. Gobernador del mismo Estado, fecha 27 de Diciembre último, contraída á ejecutar el expresado artículo, y en que se les impone ademas una multa de doscientos pesos á cada uno, si no cumplían con el propio artículo.

3º Sáquense las copias correspondientes de esta sentencia para su publicacion, mandándose una al "Periódico Oficial" del Gobierno del Estado, y remítanse los autos á la Suprema Corte para los efectos legales, despues de notificada la misma sentencia á quienes corresponda. El C. primer suplente del Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, en ejercicio por falta de propietario, así lo resolvió, mandó y firmó, por ante mí.—Doy fé.—*Lic. Cristóbal Chapa.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterey, 7 de Febrero de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 24 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Lázaro Garza Ayala, como apoderado de los CC. José M^a Flores, Catarino Valadéz, Lino García, Bárbaro Almaráz, Jesus M^a Almaráz, Rafael Peña, Ramon Jimenez, Pedro Verástegui, Severo Morales, Jesus Paz, Perfecto Rocha, Faustino Roel, Lic. Secundino Roel, Prisciliano Zambrano y Antonio Quibrera, escrutadores electos en las elecciones municipales de la ciudad de

Monterey, contra los efectos del decreto número 27 de la Legislatura del Estado de Nuevo Leon, por considerar violadas en sus personas, las garantías que reconoce la Constitucion general de la República en sus artículos 14 y 16. Visto el informe que rindió el C. Gobernador del Estado, como autoridad ejecutora del acto reclamado; lo pedido por el C. Cefe de Hacienda, llevando la voz fiscal por ministerio de la ley; lo alegado y probado por el representante de los quejosos, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y considerando: que si bien es cierto que en cuanto á la ley expedida por la Legislatura, la justicia federal no puede juzgar de ella por ser los Estados libres y soberanos en su régimen interior, á no ser que los efectos de ellas ataquen alguna de las garantías que la Constitucion general reconoce á los CC., en cuyo caso debe ampararlos; que en el presente, la última parte del artículo 4º de la ley expedida por la Legislatura de Nuevo Leon, dió efecto retroactivo á la misma ley, por que esta fué expedida con posterioridad al hecho que calificó como criminoso, determinando que se juzgara á los quejosos como falsificadores del voto público, con cuyo hecho se ha infringido el artículo 14 de la Constitucion federal; que la órden que dictó el C. Gobernador del Estado, imponiendo á los escrutadores una multa de doscientos pesos, atacó á los mismos la garantía que reconoce el artículo 16 de la propia Constitucion; con fundamento de estos artículos, de los 101 y 102 de la misma, y ley 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de reformasse y se reforma el fallo del Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, que declaró: 1º La Justicia de la Union ampara y protege á los CC. José M^a Flores, Catarino Valadéz, Lino García, Bárbaro Almaráz, Jesus M^a Almaráz, Rafael Peña, Ramon Jimenez, Pedro Verástegui, Severo Morales, Jesus Paz, Perfecto Rocha, Faustino Roel, Lic. Secundino Roel, Prisciliano Zambrano y Antonio Quibrera, contra los efectos

tos del artículo 4º del decreto de la Legislatura del Estado de Nuevo Leon de 23 de Diciembre último. 2º La Justicia federal ampara y protege igualmente á los expresados ciudadanos, contra la órden del C. Gobernador del mismo Estado, fecha 27 de Diciembre último, contraída á ejecutar el expresado artículo, y en que se les impone ademas una multa de doscientos pesos á cada uno, si no cumplían con el propio artículo, y se declara.

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege á los referidos ciudadanos, contra lo determinado en la segunda parte del artículo 4º del decreto antes mencionado. Segundo: la Justicia de la Union los ampara y protege tambien, contra la órden del C. Gobernador del Estado, fecha 27 de Diciembre último, contraída á ejecutar la expresada parte 2ª del artículo 4º de la ley, imponiéndoles una multa de doscientos pesos á cada uno.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto y por mayoría respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Marzo 13 de 1874.
Emitio Ordaz.

CRIMINAL.

Causa instruida ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato contra María Bonifacia Tovar, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en la mañana del día 13 de Julio último, María Bonifacia Tovar ocurrió á la tienda llamada "La Vizcaina" á comprar una libra de chocolate, que pagó con un peso de cobre, que el C. Carlos Olmedo dependiente de la misma tienda, le devolvió despues de inutilizarlo; y en seguida pagó con otro peso, que tambien resultó de cobre y fué inutilizado. El agente de policía C. Leon Sanchez, á quien se dió aviso de estos hechos, redujo á prision á la procesada, que fué consignada al Juzgado del digno cargo de V. por el delito de circulacion de moneda falsa.

En la averiguacion resultaron probados los dos actos de circulacion de moneda falsa, por la confesion de la procesada, y las declaraciones de los testigos presenciales, CC. Carlos Olmedo y Cruz Pedraza, cuyas constancias unidas á la certificacion judicial de las monedas de que se hizo uso y á la calificacion que hicieron de ellas dos peritos plateros, justifican la existencia del delito que motivó la consignacion.

La procesada en sus declaraciones y en su confesion con cargos, dijo que había adquirido las monedas falsas de la Señora Dª Mucia Espinosa, en cuya casa estaba con el caracter de sirvienta; pero esta circunstancia no se probó, porque la Señora Espinosa declaró, que las monedas que había dado á María Bonifacia Tovar eran buenas, y que las había recibido de su hermano D. Benito Espinosa, que como comerciante conocía bien el dinero; examinado el C. Espinosa, estuvo conforme con la Señora su hermana. Se escepcionó ademas la procesada di-